



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO: ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: JUAN ALBERTO SALGADO HENAO
DEMANDADO: AFP PORVENIR S.A. – AFP SANDIA S.A. – COLPENSIONES
RADICADO: 05001 31 05 010 2019 00398 01
ACTA N°: 63

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE y JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **JUAN ALBERTO SALGADO HENAO** para pronunciarse sobre los recursos de apelación presentados por ambas partes y en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES** frente a la sentencia con la cual el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 63** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA¹

El DEMANDANTE pretende con este proceso básicamente lo siguiente: **i)** Se DECLARE la ineficacia o nulidad, de la afiliación que hizo al RAIS administrado por la AFP HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A., y en consecuencia a los posteriores traslados efectuados a SKANDIA hoy OLD MUTUAL S.A., y PORVENIR S.A. **ii)** Se ORDENE a PORVENIR S.A. trasladar los aportes de cuenta individual, rendimientos financieros y bono pensional a COLPENSIONES, y a esta última, que reciba todos los conceptos antes mencionados. **iii)** Se CONDENE a PORVENIR S.A. con motivo de perjuicios patrimoniales, al pago de los honorarios profesionales consignados en el contrato de prestación de servicios profesionales, y a los DEMANDADOS, al pago de las costas y agencias en derecho.

En sustento de sus pedimentos afirmó básicamente lo siguiente: **i)** El DEMANDANTE nació el día 19 de mayo de 1960 y empezó a laborar el 25 de diciembre de 1976 en ALMACEN ÉXITO. **ii)** Efectuó traslado del RPM al RAIS, cuando se encontraba trabajando al servicio

¹ 01PrimeraInstancia / Archivo 02. EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL
05001310501020190039800_C001 / Págs. 2 – 12

de la DIRECCION SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL como JUEZ PENAL el 20 de septiembre de 1998 a la AFP FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A. **iii)** Asegura que fue una asesora de AFP HORIZONTE S.A. quien lo abordó con la finalidad de que se trasladara a dicho fondo. No se le explicó su verdadera situación pensional, no se le hizo proyección o comparativo alguno, ni se le hizo claridad del derecho que le asistía a permanecer en el RPM. Afirma que no se le mencionaron ninguna de las desventajas que traería consigo el traslado, pero sí le realizaron promesas de que estaría mejor en el fondo con la intención de engañarlo y que este aceptara el traslado. Explica que si hubiese conocido las condiciones reales que le traería el traslado, no hubiera suscrito el formulario. **iv)** Realizó un nuevo traslado el 22 de agosto de 2005, esta vez a SKANDIA S.A. hoy OLD MUTUAL S.A. y volvió en el mes de octubre de 2008 a la AFP HORIZONTE hoy PORVENIR S.A. Un cuadro comparativo en el HECHO DECIMO de la demanda muestra cómo su situación pensional hubiera sido mucho más beneficiosa de haber permanecido en el RPM. Y señala que le fueron ocasionados perjuicios patrimoniales fruto de la omisión de información relacionada con la expectativa pensional, haciéndolo incurrir en el pago de 10 SMLMV más 2 SMLMV adicionales como prima de resultado, conforme al contrato de prestación de servicios suscrito el 10 de agosto de 2018.

2. CONTESTACIONES

2.1. PORVENIR S.A.²

La entidad se opuso a todas las pretensiones, declaraciones y condenas formuladas en la demanda. Propuso como excepciones las siguientes: PRESCRIPCIÓN, BUENA FE, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, EXCPCIÓN GENÉRICA.

2.2. SKANDIA S.A.³

La entidad se **opuso a todas y cada una de las peticiones formuladas en la demanda.** Propuso como excepciones: PRESCRIPCIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, BUENA FE, GENÉRICA, PAGO.

2.3. COLPENSIONES⁴

La administradora del régimen de prima media se opuso a todas y cada una de las peticiones formuladas en la demanda, en tanto no se encuentran soportes facticos y legales para acceder al reconocimiento de las peticiones incoadas. Propuso como excepciones las que denominó: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA Y FALTA DE DERECHO PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, INEXISTENCIA DE LA NULIDAD DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA AFILIACIÓN AL RPM POR FALTA DE LIGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

² 01PrimeraInstancia / Archivo 02. EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL
05001310501020190039800_C001 / Págs. 184 – 213
³ 01PrimeraInstancia / Archivo 02. EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL
05001310501020190039800_C001 / Págs. 126 – 140
⁴ 01PrimeraInstancia / Archivo 02. EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL
05001310501020190039800_C001 / Págs. 236 – 249

PASIVA, INNOMINADA O GENÉRICA, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS.

3. SENTENCIA⁵

En la audiencia del **08 de JULIO de 2021** el **JUEZ DECIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN** tomó las siguientes decisiones⁶: **i) DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación de JUAN ALBERTO SALGADO HENAO al régimen de ahorro individual con solidaridad. **ii) CONDENÓ** a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. a trasladar con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la totalidad de las cotizaciones realizadas por JUAN ALBERTO SALGADO HENAO , sin descuentos de ningún tipo (como gastos de administración, garantía de pensión mínima y comisiones), junto con los rendimientos financieros generados en su cuenta de ahorro individual. **iii) CONDENÓ** a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS SKANDIA S.A. en el mismo término de treinta (30) días hábiles, a reconocer y pagar a COLPENSIONES, las cuotas deducidas de cualquier índole, como gastos de administración, garantía de pensión mínima y comisiones y los rendimientos financieros generados por el tiempo que duró la afiliación del demandante en la AFP OLD MUTUAL hoy SKANDIA S.A. **iv) ORDENÓ** a COLPENSIONES, reactivar la afiliación de JUAN ALBERTO SALGADO HENAO, sin solución de continuidad, y una vez recibidos los recursos provenientes de la AFP PORVENIR S.A., deberá actualizar la historia laboral de éste con todos los aportes realizados mientras estuvo afiliado al RAIS. **v) Se absolvió** a las demandadas de la pretensión encaminada al pago de perjuicios por lo dicho en la

parte motiva. **DECLARÓ** IMPROBADAS las excepciones de mérito propuestas por los demandados. COSTAS a cargo de las AFP SKANDIA S.A y PORVENIR S.A. No se condena en costas a COLPENSIONES.

4. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. PORVENIR S.A.⁷

Con el recurso se pretende la revocatoria de la sentencia: **i) Frente a la declaratoria de ineficacia de traslado:** Aduce que el formulario es un documento público que se presume auténtico, contiene las declaraciones de que trata el artículo 114 de la Ley 100, no fue tachado y desconocido por lo que no hay lugar a restarle a valor. Invoca el artículo 271 de la ley 100 y los artículos 1745 y siguientes del Código Civil, y señala que sí se cumplió con la carga probatoria porque PORVENIR aportó los documentos que tenía en su poder para demostrar que el DEMANDANTE ha estado vinculado producto de una decisión informada. Lo que también se acredita con la conducta que tuvo el

⁵ 01PrimerInstancia / Archivo 04. ACTA COMPILADA ART 77 Y 80

⁶ 01PrimerInstancia / Archivo 08. AUDIENCIA CUARTA PARTE TYJ

05001310501020190039800s20210396729 07_08_2021 10_13 PM UTC / min 00:40:47 – 00:44:10

⁷ 01PrimerInstancia / Archivo 08. AUDIENCIA CUARTA PARTE TYJ

05001310501020190039800s20210396729 07_08_2021 10_13 PM UTC / min 00:56:55 – 01:04:43

demandante que permaneció en régimen de ahorro individual y realizó traslados horizontales entre fondos privados, permitiendo el descuento con destino a su cuenta de ahorro individual en cada una de las entidades que estuvo afiliado. **ii) Sobre las sumas a devolver:** a) El artículo 113, literal b de la ley 100 menciona cuales son los dineros que se deben trasladar cuando existe un cambio de régimen, esto es, el saldo de ahorro de la cuenta individual incluidos los rendimientos, lo que impide que legalmente se pueda ordenar la devolución de sumas diferentes y al hacerlo se configura un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES. b) Invoca concepto 2019152216903 del 17 de enero de 2017 de la Superintendencia Bancaria y agrega que estos conceptos no financian la prestación de vejez y no son parte integrante en ella, por lo que sí prescriben de acuerdo a los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

4.2. DEMANDANTE⁸

El objeto del recurso se circunscribe única y exclusivamente a la revocatoria de la sentencia en cuanto a su numeral 5 referido a la absolución a PORVENIR respecto de la indemnización por perjuicios solicitada, señalando: En la sentencia SL 373 - 2021, si bien relativa a temas de pensionado, se da una apertura a la posibilidad de que los afiliados puedan solicitar el reconocimiento de la indemnización de perjuicios cuando han sufrido un daño generado en su patrimonio y al proceso se allegó el documento que contiene el contrato de prestación de servicios con el que el demandante contrajo una obligación relativa al pago de honorarios para lograr la ineficacia del acto jurídico con el cual la AFP omitió el cumplimiento de sus obligaciones, que se constituye en un daño emergente que debe ser reparado en los términos del artículo 16 de la ley 446 del 98 y el artículo 4 del decreto 656 del 94. Se trata de una responsabilidad de carácter contractual, acreditándose los cuatro elementos, un hecho imputable al fondo privado, el dolo o culpa en la ocurrencia del acto jurídico del traslado, y el daño o perjuicio derivado de la víctima y claramente el nexo causal entre daño y la culpa. Y las costas procesales no suplen esta situación porque no son un perjuicio, son una consecuencia obligada desarrollada procesalmente para la parte que es vencida en un pleito, al margen o no de la demostración de un perjuicio, por lo que no se pueden confundir con los perjuicios irrogados y demostrados en el marco de un proceso judicial.

4.3. SKANDIA S.A.⁹

Solo se cuestiona el **numeral tercero** de la sentencia, sobre las sumas a devolver a COLPENSIONES señalando lo siguiente: a) Se ha desconocido por completo el artículo 230 de la Constitución Política porque la decisión se ampara en un precedente jurisprudencial y se aparta por completo de los postulados de orden legal, invocando el artículo 7 del decreto 3995 del 2008, resaltando que SKANDIA el 17 de octubre del

⁸ 01PrimerInstancia / Archivo 08. AUDIENCIA CUARTA PARTE TYJ
05001310501020190039800s20210396729 07_08_2021 10_13 PM UTC / min 00:45:44 – 00:56:46

⁹ 01PrimerInstancia / Archivo 08. AUDIENCIA CUARTA PARTE TYJ
05001310501020190039800s20210396729 07_08_2021 10_13 PM UTC / min 01:05:20 – 01:14:10

año 2008 trasladó nuevamente hacia HORIZONTE hoy PORVENIR, la suma de \$67.856.162,38, que obedece a los siguientes conceptos: la cotización obligatoria y los aportes voluntarios realizados a favor del DEMANDANTE. Enfatiza en que ese 3% de gastos de administración está destinado a cubrir las posibles contingencias o siniestros por invalidez o sobrevivencia, sufragándose en su oportunidad las respectivas primas de las pólizas desde el 1 de octubre de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2008, por lo que no cuenta con recurso alguno referente a ese porcentaje. Y remite a los conceptos de la Superintendencia Financiera quien ha indicado que cuando se declara nulidad o ineficacia del traslado, debe efectuarse el traslado de los saldos de la cuenta, mas no sobre los gastos de administración. b) Resalta el artículo 964 del Código Civil porque el poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos y brilla por su ausencia prueba alguna en la que la parte actora se haya esmerado por acreditar que en el traslado realizado hacia SKANDIA ésta obró de mala fe. c) Finalmente, aduce que debe operar la figura de la prescripción trienal, señalando que la afiliación en esa AFP finalizó el 30 de septiembre de 2008.

4.4. COLPENSIONES¹⁰

Se solicita la revocatoria total de la sentencia: **i) Sobre la declaratoria de ineficacia** dice que: a) se está vulnerando lo expuesto en sentencias como la SU-130 del 2013, la C-789 de 2002, la C-1024 de 2004, la T-489 del 2010 en lo relacionante a la sostenibilidad financiera del sistema pensional. E Invoca el Decreto 663 de 1993, la Ley 1328 de 2009, Decreto 2341 de 2010 y la Ley 1748 de 2014 sobre los requisitos al momento de suscribir el formulario de afiliación por el DEMANDANTE al RAIS, resaltando que no es un afiliado lego al tratarse de una persona profesional que tiene conocimientos jurídicos, quien también actuó como juez penal e incluso trabajó en un juzgado promiscuo, por lo que no se puede decir que no haya tenido ninguna relación o acercamiento con los conceptos de la seguridad social. b) Debe tenerse de presente que no es beneficiario del régimen de transición. En el fondo privado no se niega una oportunidad de pensión, pues si tiene las semanas de cotización para una pensión de garantía mínima puede acceder a ella resaltando que significa que existe un temor infundado, y que no se corrobora si el Régimen de Prima Media le es más benéfico lo que conlleva a que, de manera general y sin mirar las particularidades del caso se declare la ineficacia, imponiendo obligaciones a COLPENSIONES con las que se afectado el sistema pensional. **ii) Solicita se mantenga incólume la absolución frente a las costas** y se acoja al criterio subjetivo en la segunda instancia al momento de decidir el recurso, porque COLPENSIONES siempre ha sido un tercero de buena fe en estos procesos.

5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

¹⁰ 01PrimeraInstancia / Archivo 08. AUDIENCIA CUARTA PARTE TYJ
05001310501020190039800s20210396729 07_08_2021 10_13 PM UTC / min 01:14:17 – 01:20:04

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia¹¹, intervino únicamente **COLPENSIONES** en los siguientes términos¹²: **i) En relación con la declaratoria de ineficacia de traslado argumenta: a)** Que la parte demandante no logra acreditar los supuestos de hecho y de derecho para la declaratoria de Ineficacia de la Afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en razón a que no cumple con lo preceptuado por el artículo 167 del código general del proceso, señalando que la Corte Suprema de Justicia sin atender las situaciones particulares de cada caso invierte la carga de la prueba en cabeza del fondo privado y exime al demandante de probar la existencia de un vicio del consentimiento al momento de afiliarse al RAIS, obligando a que toda la carga probatoria recaiga exclusivamente en una de las partes, sin que exista un menor esfuerzo procesal encabeza del demandante. Y que esta posición jurisprudencial creó una situación ventajosa que favorece a los afiliados porque su simple afirmación respecto a que el fondo no les brindó información precisa, clara y exacta plasmada en una demanda interpuesta en cualquier tiempo, les viene permitiendo obtener el traslado al Régimen de Prima Media sin que sea necesario que allegue el más mínimo elemento probatorio al interior del proceso. Invoca así la sentencia C 086 de 2016 para señalar que no pueden considerarse a todos los afiliados como una parte débil e indefensa. **b)** Que tampoco se pueden desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad del demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Y que el juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de **COLPENSIONES**, quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de una eventual prestación, lo que igualmente violenta el principio de la sostenibilidad financiera del sistema. Invoca así el artículo 48 de la Constitución Política adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 334 de la Carta para apelar al respeto del principio de sostenibilidad financiera y el salvamento de voto a la sentencia SL 88720 – 2021. **ii) Sobre las sumas a devolver** transcribe apartes de la sentencia SL 4360-2019 y cita las siguientes: SL17595-2017, SL4989-2018 y SL1421-2019. **iii) Finalmente**, al respecto de las costas señala que no tiene soporte una condena por este hecho, pues la entidad ha obrado de buena fe, y actúa según lo ordena la característica filosófica de sus funciones, sin que pueda ejecutar hechos prohibidos por las leyes y menos violar sus propios reglamentos razón por la cual no debería estar llamado a pagar costas o agencias en Derecho, ni condenarse en costas en segunda instancia porque está solicitando una adición al fallo de segunda instancia que va en PRO de una sentencia que si ha de salir desfavorable será concreta con lo relacionado a los valores y conforme al principio de la estabilidad financiera del sistema general de pensiones.

¹¹ Numeral 1 del artículo 13 de la ley 2213 de 2022/ 04AutoAdmiteCorreTraslado

¹² Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 03AlegatosSustitucionColpensiones1020190398 /

Pág. 3 – 11

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso sobre los recursos de apelación de ambas partes, así como en el grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de **COLPENSIONES**, lo que impone efectuar el análisis en el siguiente orden lógico: En primer lugar, la evolución normativa sobre los DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN MATERIA DE ASESORÍA E INFORMACIÓN CLARA Y VERAZ para tomar la decisión de traslado de régimen inicial al RAIS. Así, se analizará en el CASO CONCRETO si debe CONFIRMARSE la DECISION de DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN del DEMANDANTE, verificando lo relativo a las sumas que se ordenan devolver.

6. LOS DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN RELACIÓN CON EL ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN O TRASLADO.

Esta Sala de Decisión ha tenido la oportunidad de expresar en varias oportunidades, que la decisión de un afiliado que estaba cotizando en el **I.S.S.** o en las otras Cajas de Previsión Social creadas antes de la Ley 100, **de trasladarse al RAIS**, exigía que la persona tuviese absoluta claridad en relación con su situación pensional, las diferencias entre cada uno de los regímenes, los beneficios e inconvenientes de cada régimen pensional y en especial, **los efectos que en su caso se generan si toma la decisión de trasladarse.**

El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es exigible **desde su creación, y sin hacer distinción alguna**, de acuerdo a lo previsto en el **Decreto 663 de 1993**, aplicable a las AFP desde su origen, en el que se prescribió en el **numeral 1.º del artículo 97**, la obligación de las entidades de *«suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen.*

Es así como, conforme a lo previsto en el **artículo 271** en concordancia con el **literal b) del artículo 13 de la Ley 100**, los trabajadores tienen la opción de **elegir** *«libre y voluntariamente»* aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, y por ello, si alguna persona jurídica o natural atenta en cualquier forma contra el derecho de **afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social**, se genera como consecuencia la ineficacia de la afiliación.

En relación con este aspecto, la Sala laboral de la Corte Suprema ha desarrollado un precedente pacífico: **SL12136-2014, SL17595-2017, SL19447-2017, SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464- 2019, SL4360-2019, SL2611-2020 y SL4806-2020, SL 2208 -2021 – SL 3871-2021- SL 5686-2021- SL 5688-2021- SL 1055-2022** que se apuntala en las siguientes premisas básicas:

- Si bien en los últimos años se ha intensificado la regulación, con lo previsto en la **Ley 1328 de 2009 artículos 3, 5, 7 y 9; Ley 1480 de 2011 artículo 23, Parágrafo 1o. del artículo 2 de la Ley 1748 de 2014**, y el **Decreto 2071 de 2015**, lo cierto es que la obligación de información clara y concreta previa al traslado se encuentra expresa

en normas anteriores vigentes para la época en que se efectuó el traslado del demandante, **sin distinguir que tal deber sólo se refiera a los casos de las personas que eran beneficiarias del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100.**

- Para ello baste citar, **el artículo 13 en sus literales b) y k), el 106 y el 114 de la Ley 100**, en concordancia con lo previsto en el **artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y la modificación introducida con la Ley 795 de 2003**, normas en las que se establece que la selección régimen se debe tomar de manera libre, espontánea y sin presiones como requisitos para poder afirmar su eficacia; así como la obligación de las AFP de suministrar a los usuarios la información necesaria para escoger las mejores opciones del mercado y tomar DECISIONES INFORMADAS.
- Siendo, así las cosas, antes del traslado el usuario debe conocer la lógica del RAIS y la esencia de su funcionamiento, sustentado en la capacidad efectiva del ahorro a lo largo de toda la vida para poder garantizar el derecho a una pensión. Y debe tener total claridad acerca de los aspectos relacionados no sólo con el monto y los requisitos de causación, sino la eventual opción de no acceder a esta prestación. Todos estos aspectos deben ser expresamente informados, para que el usuario pueda efectuar la comparación con las disposiciones que regulan el derecho pensional a los afiliados en el Régimen de Prima Media.
- En fin, significa entonces que la asesoría que debe brindar la Administradora de Pensiones en esa **ETAPA PREVIA Y PREPARATORIA** a la formalización de la información, no sólo debe ser completa y comprensible para el afiliado, sino que trasciende al "DEBER DEL BUEN CONSEJO" en los términos definidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su precedente, deber que en los mismos términos fue acogido en el **artículo 3 del Decreto 2071 de 2015**, pues al mostrar con detalle las diferentes alternativas de la persona tras el análisis de su caso, mostrando los beneficios e inconvenientes de tomar la decisión de traslado, debe incluso ir más allá, para evitar que la persona tome una opción que claramente la perjudica.
- Y en relación con la carga probatoria, es claro que en los términos del **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, ello no se agota solo con traer los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada fue suficiente para la persona, lo que no se satisface únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre. Por ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, no se trata únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición. Y es así como las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar

- si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.
- Finalmente, baste señalar cómo el criterio jurisprudencial orientador para este tipo de casos, fue plasmado en el **Código General del Proceso en el artículo 167**, norma en la que se consagra la posibilidad de distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos que ayuden a esclarecer el objeto del litigio y que en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala, no hay duda que la parte que debe cumplir con esa carga es el Fondo Privado: **a)** Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, con la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le ha entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **b)** Conoce y tiene los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y que hizo posible que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

Por último, debe la Sala señalar que si bien, el precedente jurisprudencial se encuentra referido a casos de personas que se encontraban afiliadas a una administradora del Régimen de Prima Media y además, beneficiarias del régimen de transición, a quienes les afectó de manera considerable la decisión de traslado de régimen pensional; sin embargo, resulta evidente que la *Ratio Decidendi* de esas providencias resulta plenamente aplicable, a quienes eligieron el Régimen de Ahorro Individual por Primera Vez, porque lo relevante está, en que efectivamente se acredite dentro del proceso por la Administradora de Pensiones, que sí suministró la INFORMACION CLARA, COMPLETA, SUFICIENTE, en términos de transparencia y eficiencia.

7. EL CASO CONCRETO

Para efectuar el análisis se debe partir de las siguientes premisas no discutidas: **i) JUAN ALBERTO SALGADO HENAO** nació el **19 de mayo de 1960**, por lo que en este momento cuenta con **63 años**¹³. **ii)** Inició su vinculación laboral afiliándose al I.S.S el **9 de enero de 1978** entidad en la que cotizó 164,14 semanas hasta junio de 1998¹⁴. **iii)** Se trasladó del REGIMEN DE PRIMA MEDIA al de AHORRO INDIVIDUAL suscribiendo formulario con solicitud de vinculación a **HORIZONTE S.A (hoy PORVENIR S.A.)** el **20 de septiembre**

¹³01PrimeraInstancia / Archivo

05001310501020190039800_C001 / Pág. 18

¹⁴01PrimeraInstancia / Archivo

05001310501020190039800_C001 / Pág. 58

02.

EXPEDIENTE

ORDINARIO

LABORAL

02.

EXPEDIENTE

ORDINARIO

LABORAL

de 1998, trabajaba para la Dirección Seccional de la Rama Judicial como Juez Penal¹⁵. Luego se trasladó a la **AFP SKANDIA S.A.** el **22 de agosto de 2005** cuando trabajaba en la Rama Judicial de Antioquia como Asistente Administrativo¹⁶. Finalmente, firmó solicitud de traslado de vuelta a **HORIZONTE S.A. (hoy PORVENIR S.A.)** el **13 de agosto de 2008**¹⁷ donde se encuentra actualmente.

Las demandadas han afirmado a lo largo del proceso que la SELECCIÓN DE RÉGIMEN se tomó de **forma libre, espontánea y sin presiones** en los términos del formulario de afiliación suscrito por el actor, pero en criterio de la Sala, leyendas de este tipo no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, **acreditan un consentimiento, pero no informado**. En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha precisado de forma reiterada que la suscripción de aquel documento, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como *"la afiliación se hace libre y voluntaria"*, *"se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones"* u otro tipo de leyendas de esta clase, son insuficientes para dar por demostrado dicho deber (CSJ: SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, reiterada en SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Pues bien, según lo acreditado en el proceso, resulta evidente que para la fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para **JUAN ALBERTO SALGADO HENAO**, éste tenía menos de **40 años** de edad y **de 15 años de servicio**. Pero de acuerdo con el análisis efectuado en el **acápito sexto** de esta providencia y con el precedente jurisprudencial sobre la materia, los promotores de la AFP ante la suscripción del formulario de traslado, **independiente de si el demandante era beneficiario o no del régimen de transición**, tenía no solo el **DEBER** sino la **OBLIGACIÓN** de brindarle una **asesoría personalizada**, analizando **las circunstancias particulares, y mostrando aspectos concretos de su situación pensional**.

Como para la época en que suscribió el formulario no había entrado en vigencia la Ley 797, se le debió explicar que, en el régimen de prima media, el derecho a la pensión de vejez se causaría al arribar a los 60 años de edad y acreditando 1000 semanas cotizadas, para pensionarse con una mesada cuyo valor podría ser con una tasa del 85% en caso de cotizar 1400 semanas, sobre un IBL integrado en los términos del artículo 21 de la Ley 100.

¹⁵ 01PrimeraInstancia / Archivo 05001310501020190039800_C001 / Pág. 215

¹⁶ 01PrimeraInstancia / Archivo 05001310501020190039800_C001 / Pág. 141

¹⁷ 01PrimeraInstancia / Archivo 05001310501020190039800_C001 / Pág. 216

02.	EXPEDIENTE	ORDINARIO	LABORAL
02.	EXPEDIENTE	ORDINARIO	LABORAL
02.	EXPEDIENTE	ORDINARIO	LABORAL

Y se le debió indicar además, que si se trasladaba para el RAIS, las condiciones pensionales serían las siguientes: **i)** Se podría pensionar antes de los 62 años, sin embargo tal circunstancia estaba sujeta a una condición y es que tuviera el capital suficiente para poder optar al menos por una pensión mínima (artículo 64 Ley 100); **ii)** Como el demandante tenía cotizaciones en el REGIMEN DE PRIMA MEDIA, debía saber que las cotizaciones que habían efectuado en el I.S.S. se verían representadas en un bono pensional tipo A que sólo **se redime en el caso de los HOMBRES a los 62 años**, de manera que, si se daban las condiciones para pensionarse anticipadamente, habría que negociar el bono en el mercado financiero, disminuyendo su valor, lo que tendría efecto en el valor de la mesada, en la medida en que disminuiría el valor del capital para financiar la prestación. **iii)** Frente al valor de la pensión en el RAIS, se debió explicar que ésta depende del capital consignado en la cuenta individual y según la modalidad pensional elegida (artículos 79 a 82 de la Ley 100), y que el valor que se abonaría a la cuenta individual no sería equivalente al 100% de la cotización, porque una parte se destinaría a pagar la prima mensual de la compañía de seguros, a gastos de administración y al fondo de solidaridad del RAIS. **iv)** También se debía indicar, que en caso de que no completara el capital suficiente para obtener una pensión mínima (equivalente al 110% del salario mínimo a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones actualizado con el IPC), entonces **debía seguir cotizando hasta obtener 1.150 semanas y cumplir 62 años**, para poder acceder a la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, mostrando que esos dos requisitos eran superiores a los consagrados en el Régimen de Prima Media (I.S.S.). **v)** Y que la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, es un beneficio que no se presenta en todos los casos porque está sujeto a unas condiciones y explicarle cuáles (artículo 84 de la Ley 100, vigente para la época), para que tuviese claro que, si no cumplía con ello, no obtendría pensión de vejez y por ello, la entidad le devolvería los saldos que estuvieran en su cuenta individual, con el efecto que eso genera en relación con la afiliación en salud.

Pero se observa con claridad que en el proceso no se acreditó por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES el haber suministrado esta información clara, completa y detallada, sin que se hubiese efectuado confesión en contra por el señor **JUAN ALBERTO SALGADO HENAO** quien a lo largo del proceso ha sido enfático en reiterar las afirmaciones de la demanda relativas a la ausencia de información completa. Debe entonces la Sala CONCLUIR, conforme las normas, jurisprudencia y acervo probatorio recaudado, que resulta procedente **CONFIRMAR** la decisión de **DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN**.

Lo anterior, sumado al hecho de que, el traslado que hubiese efectuado el demandante a otra AFP en manera alguna convalida la omisión en las obligaciones de información en la vinculación inicial al RAIS. La Corte Suprema en su Sala Laboral ha señalado en su precedente (**SL 5686 -2021, SL 1055 -2022**) que no puede desconocerse que un afiliado durante su vida laboral puede hacer varios traslados entre regímenes pensionales, **o**

entre administradoras, sin que tal evento signifique que la AFP pueda omitir, en cada ocasión, el suministro de la información a que está obligada, con la calidad y en la oportunidad debidas so pretexto de una o varias vinculaciones anteriores. En la sentencia **CSJ SL 3349 de 2021** expresó:

el hecho de tener sucesivas afiliaciones en el RAIS, después de haber abandonado el RPM, no tiene como consecuencia que de ello se derive una suerte de purga en el deber de información o de convalidación en su incumplimiento, tampoco el hecho de que el impugnante se haya vinculado, de manera discontinua al RAIS, aún con la misma administradora, significa *per se* que se tenga suficiente ilustración, conocimiento o comprensión de cada uno de los regímenes o que, se itera, tal situación releve del cumplimiento de sus deberes a la AFP, como lo exigen las normas aplicables en el momento en que acaezca tal evento.

Es decir, las administradoras siempre tendrán el deber de brindar información completa y veraz a los afiliados en cada vinculación, sin que pueda exonerarse de ella argumentando que el afiliado ya conocía previamente el régimen al que se vincula; Y sin que las sucesivas vinculaciones convaliden aquella que se hizo con vicios y dieron lugar a la declaratoria de ineficacia.

Y tampoco se comparte el análisis referido **al monto de la pensión de vejez en cada régimen**. Sobre el particular, la Alta Corporación también se ha pronunciado, en sentencias como la **SL 5686 – 2021** en la que indicó:

Recuérdese que el análisis judicial sobre el cumplimiento del deber de información a cargo de los fondos privados está al margen, en principio, de la situación pensional de la persona, por lo que no sería coherente exigir que se acredite que el traslado causó una lesión injustificada que impidió el acceso a un derecho pensional en abstracto, a menos que el litigio se dirija justamente a acreditar un perjuicio como pretensión complementaria, sin que esto incide en la declaratoria de ineficacia de traslado.

Y es que en un estadio de afiliación activa al sistema y más aún cuando el derecho pensional aún está en formación, los jueces no pueden elucidar en abstracto sobre la conveniencia de estar o permanecer en uno u otro régimen y los perjuicios que ello eventualmente acarrearía, pues cada uno de los modelos consignan características que pueden ser convenientes tanto para el afiliado como a sus eventuales beneficiarios en determinada situación particular.

A raíz de ello, la jurisprudencia de la Corte ha garantizado el *derecho básico* de los trabajadores a *recibir información necesaria, objetiva y transparente durante el proceso de traslado de régimen pensional*, como una garantía mínima consagrada en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que encuentra respaldo en el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 y se armoniza con artículo el 13 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra que cualquier estipulación que afecte o desconozca los derechos mínimos «no produce efecto» (CSJ SL3871-2021), de modo que incumplida esa prerrogativa, es imperativo declarar la ineficacia del traslado.

Debe destacarse que las ADMINISTRADORAS DEL RAIS y COLPENSIONES en la contestación propusieron la EXCEPCION de PRESCRIPCION, pero en el contexto que se ha venido analizando, debe señalarse que estamos en presencia de la ineficacia del traslado: Y una de las características esenciales de la inexistencia, es que es insubsanable por la prescripción - No adquiere vida por el transcurso del tiempo, por lo tanto, en cualquier tiempo puede ser alegada su inexistencia. En la sentencia **SL1688-2019**, reiterada en las **SL4360-2019 y SL 1055-2022**, la Sala Laboral de la Corte explicó con claridad sobre la inoperancia del medio exceptivo, no

solo por su conexidad con un derecho fundamental e irrenunciable, sino porque el sustento fáctico del proceso da lugar a consolidar el status de pensionado, y, en consecuencia, propiciar la posibilidad del disfrute de un derecho económico no susceptible de extinción por el transcurso del tiempo.

Finalmente, **en relación con las sumas de dinero que se deben devolver**, debe señalarse lo siguiente: **i)** En la medida en que el legislador no previó un camino específico para declarar la ineficacia distinto al de la nulidad, la Sala Laboral de la CSJ en sentencias **SL1688, 3464 y SL 4360 de 2019**, así como en la **SL 2877 y SL 4811 de 2020** ha explicado que las consecuencias prácticas de la primera declaración son idénticas a la de la segunda (vuelta al *statu quo ante*). **ii)** Y como el precepto que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades es el **artículo 1746 del Código Civil** y este por analogía es aplicable a la ineficacia, según esta disposición, declarada la ineficacia, las partes, *en lo posible*, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. **iii)** O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia *ex tunc* (desde siempre). De no ser posible, es decir, cuando la vuelta al ***statu quo ante*** no sea una salida razonable o plausible, el juez del trabajo debe buscar otras soluciones que resarzan o compensen de manera satisfactoria el perjuicio ocasionado al afiliado, con ocasión de un cambio injusto de régimen. **iv)** Y en la medida que la ineficacia del acto de cambio de régimen pensional supone **negarle efecto al traslado**, tal situación solo es posible bajo **la ficción de que el mismo nunca ocurrió**. Luego, si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que **nunca se cambió al sistema privado de pensiones**, y si estuvo afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que **nunca se trasladó al sistema público administrado por COLPENSIONES**. **v)** Por esto mismo, en tratándose de *afiliados*, la Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a COLPENSIONES la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales a que haya lugar; así como **los gastos de administración, las comisiones (CSJ SL4964-2018, SL1688-2019, SL2877-2020, SL4811-2020 y SL373-2021)**, los porcentajes destinados a conformar el **Fondo de Garantía de Pensión Mínima** y los valores utilizados en **seguros previsionales** con cargo a sus propias utilidades (**CSJ SJ SL2209-2021 y SL2207- 2021**). **vi)** Así, reconoce esta corporación que si bien existió una administración por parte de las AFP, además del pago de seguros, producto de la declaratoria de ineficacia todos los recursos deben trasladarse a aquella administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, teniendo presente que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional, se cubren las prestaciones causadas. Por ello, **PORVENIR S.A y SKANDIA S.A.**, efectuarán la devolución en relación con los períodos en que estuvo

afiliado. **vii)** Se destaca que ninguna de las devoluciones acá ordenadas se ve afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción, excepción propuesta por las accionadas, la que a voces de la Sala de Casación Laboral de la CSJ no opera en estos litigios, dado el carácter irrenunciable del derecho pensional, que se extiende a la acción para reclamar su conformación con todos los aspectos conexos que le son inherentes (**CSJ SL1688-2019; CSJ SL12715-2014; CSJ SL 28479, 4 jun. 2008, CSJ SL 39347 y CSJ SL 8397, 5 jul. 1996. SL1688-2019**, reiterada en las **SL4360-2019 y SL 1055-2022**). **viii)** Finalmente, para garantizar la SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA esta Sala de Decisión ordenaba que el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente definido por la Corte Constitucional en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 DE 2010 y SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM. Pero reexaminando el asunto, y a partir del precedente vertido por la Sala de Casación Laboral en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021, SL 3709-2021 y SL 1055-22**, considera que lo procedente para tal fin es ordenar **la devolución de tales sumas debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos**. Al momento de cumplirse los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Así, en este aspecto se **MODIFICARÁ y ADICIONARÁ** la providencia que se revisa.

Con relación a las devoluciones que aquí se ordenan, y toda vez que al momento de proferirse la presente decisión el DEMANDANTE alcanzó los 63 años, es completamente posible que el bono pensional ya se hubiere redimido y su valor se encuentre depositado en la cuenta de ahorro individual del señor **SALGADO HENAO**. Al tratarse de una eventualidad no acreditada en el proceso, se adicionará la sentencia, porque el valor del bono pensional corresponde al emisor, es decir al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en consecuencia, PROTECCION S.A. deberá adelantar los trámites dirigidos a la correspondiente anulación del bono y devolverá a esta entidad las sumas que por este concepto hubiere recibido, debidamente indexadas. Decisión que se encuentra ajustada a lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1748 de 1995, concordado con el Artículo 57 del referido Decreto, modificado por el Artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, inciso 2º hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones. Así, **se adicionará la providencia**.

Finalmente, en relación con la **pretensión de indemnización de perjuicios** referida al pago **de los honorarios pactados por el demandante con su apoderado con ocasión de este proceso**, baste señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, en los procesos en que haya controversia se causa la condena a la parte vencida en el proceso. Se trata entonces de aquellas

erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, dentro de las cuales se incluyen las agencias en derecho, valor que el juzgador le da al trabajo del abogado que ha triunfado en el trámite del conflicto, que deben ser asumidas por la parte que resulte vencida judicialmente, que para este caso, lo es el extremo pasivo. De esta forma, la condena en costas contiene una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir. Así, se CONFIRMA la decisión absolutoria frente a esta pretensión.

8. COSTAS

Sobre las **COSTAS**, debe indicarse lo siguiente: **i)** En primera instancia se CONDENÓ en COSTAS a SKANDIA S.A y PORVENIR S.A, decisión que no fue cuestionada. **ii)** Y respecto a las **costas en esta instancia** al no prosperar los recursos de apelación de SKANDIA S.A y PORVENIR S.A serán a su cargo. Agencias en derecho 1 salario mínimo legal mensual vigente para cada una.

9. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE:**

PRIMERO: Se CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado **Décimo** Laboral del Circuito de Medellín con las siguientes MODIFICACIONES:

- El numeral **SEGUNDO**, porque dentro de los **30 días siguientes** a la notificación de esta providencia, **AFP PORVENIR S.A.** debe trasladar a COLPENSIONES la totalidad del capital ahorrado por el señor **JUAN ALBERTO SALGADO HENAO**, junto con los rendimientos financiero a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, incluyendo así: **CUOTAS DE ADMINISTRACION, PRIMAS PARA SEGURO PREVISIONAL y las SUMAS DESCONTADAS PARA GARANTIA DE PENSION MINIMA** debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos, **en proporción a tiempo de permanencia**. Al momento de cumplirse esta orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, conforme lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.

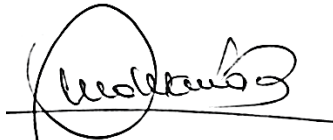
Y se adiciona, porque en caso de haberse redimido el bono pensional tipo A del demandante, se **ORDENA** a **PORVENIR S.A** adelantar los trámites para la correspondiente anulación del bono y así devolver las sumas que por este concepto hubiere recibido al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO debidamente indexadas, conforme lo definido en la parte motiva de esta providencia.

- El numeral **TERCERO**, porque se CONDENA a **SKANDIA S.A.** en el mismo término de treinta (30) días a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, incluyendo así: **CUOTAS DE ADMINISTRACION, PRIMAS PARA SEGURO PREVISIONAL y las SUMAS DESCONTADAS PARA GARANTIA DE PENSION MINIMA** debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos, **en proporción al tiempo de permanencia**. Al momento de cumplirse esta orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, conforme lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: En esta instancia se causan costas a cargo de SKANDIA S.A y PORVENIR S.A a favor del demandante. Agencias en derecho 1 salario mínimo legal mensual vigente para cada una.

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron

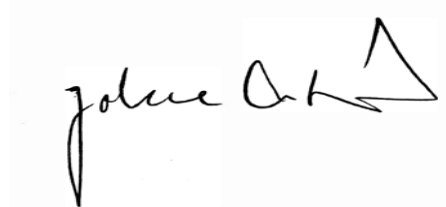
Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE



JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

RADICADO: 050013105 010 2019 00398 01

SENTENCIA del //11/08/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR:
<https://etbcsj->

my.sharepoint.com/:f/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EIS_Tp9LRtQNPgMsw_FTLClcBFPlwJKlpBCQjtviR4lkwrw?e=ikpldQ